

LA REVOLUCIÓN DEL VIENTO EN LA GUAJIRA

**MONOGRAFÍA SOBRE EL CASO DE
CONFLICTIVIDAD SOCIAL GENERADA
POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE
EÓLICO WINDPESHI POR PARTE DE
ENEL EN JURISDICCIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE URIBIA Y MAICAO EN
LA GUAJIRA.**

CONTRATO CO1.PCCNTR.5494215

CONTRATO CO1.PCCNTR.5494215 CELEBRADO ENTRE LA FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN Y LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO-ENERGÉTICA UPME QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR UN ESTUDIO DE LA CONFLICTIVIDAD EN EL SUBSECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL TERRITORIO COLOMBIANO, ABORDANDO ENFOQUES TERRITORIALES, AMBIENTALES Y DE GÉNERO; QUE PERMITAN IDENTIFICAR, COMPRENDER Y MITIGAR LOS CONFLICTOS EXISTENTES Y POTENCIALES, PROMOVRIENDO ASÍ UN DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE Y UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTAMENTE, QUE CONLLEVE AL ACCESO DEMOCRÁTICO A LA ENERGÍA, AL ASEGURAMIENTO DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA Y A LA ACCIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL ENTORNO AMBIENTAL

LA REVOLUCIÓN DEL VIENTO EN LA GUAJIRA

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación presenta una perspectiva detallada sobre lo que podría considerarse como uno de los pilares para el proceso de transición energética en Colombia, particularmente en lo relacionado a la implementación de los proyectos de energía eólica en el departamento de la Guajira. En el estudio de caso se enfoca en el proyecto Windpeshi, impulsado por la empresa Enel Green Power, el cual, a causa de la conflictividad social y el relacionamiento con las comunidades indígenas wayuu de la zona, fue suspendido de manera indefinida el pasado mayo de 2023. Adicionalmente, hay un interés particular al analizar desde diferentes perspectivas la transición económica por la que va a pasar el departamento con la reducción, y eventual terminación, de la explotación de carbón.

A través de métodos cualitativos y entrevistas semiestructuradas a diferentes actores del sector público, privado, comunidad local y comunidades indígenas wayuu de la zona de influencia del proyecto Windpeshi, construimos este estudio de caso que pretende mostrar una realidad poco conocida, y dar luces acerca de *cómo vamos* de cara a la lucha contra el cambio climático, mostrando algunos de los riesgos y obstáculos (actuales y potenciales) que se presentan en el territorio y los desafíos a los que se enfrentan los proyectos eólicos en el departamento.

Finalmente, presentan lecciones aprendidas y recomendaciones para el tratamiento de esta conflictividad en el marco de las estrategias transición energética y de adaptación/mitigación del cambio climático, dirigidas a los tomadores de decisión en el sector público -particularmente la UPME-, en el sector privado y en el sector social, y dadas por estos mismos actores. Es necesario garantizar concertaciones entre todas las partes y diálogos multiactor que permitan la construcción conjunta de territorio y soluciones que favorezcan la generación de desarrollo sostenible.

CONTEXTO GENERAL



El departamento de la Guajira está situado al norte de Colombia, limita con Venezuela y destaca su paisaje desértico cubierto por un bosque seco. Tiene los vientos más intensos del país y su temperatura rodea los 30°C. De acuerdo con José Silva, líder de la Organización Nación Wayuu, el departamento de la Guajira es rico en muchos aspectos: carbón, sal, gas, yeso, y ahora se descubre que el viento es una potencia para generar energía, y eso sale del territorio indígena wayuu.

La Guajira se ha transformado en la primera potencia de energía eólica de Colombia. Los proyectos pueden llegar a producir el 20% de la energía que demanda el país. De acuerdo con los proyectos que están en trámite, en 2031, en el territorio wayuu de la alta y media Guajira entrarían a funcionar cerca de 60 parques eólicos con 2,5 mil aerogeneradores, generando 7 GW para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), y para 2050 se producirían cerca de 16GW (Indepaz, 2019). Gran parte de las tensiones en el departamento se han

incrementado luego que el presente gobierno declarara el departamento como epicentro de la transición energética del país.

Diferentes ambientalistas y líderes y lideresas indígenas se han manifestado en contra de la denominada revolución del viento por diferentes razones, ya sean de origen sociocultural, económico, o del relacionamiento entre las partes involucradas. Por otro lado, los problemas del departamento no radican únicamente en la conflictividad social que ha generado la llegada de los proyectos eólicos, sino que el departamento tiene uno de los índices de pobreza más altos del país con 67,4%, históricamente ha habido un abandono estatal y la desnutrición infantil es preocupante. Adicionalmente, gran parte de los caminos y carreteras están bloqueadas con cuerdas para controlar el paso de los visitantes, Josefina, lideresa y autoridad de la comunidad wayuu Kamushipa, me decía que prefería bajar al casco urbano del municipio de Uribia a que yo me intentara desplazar hacia su ranchería, pues todos los carros desconocidos son detenidos por estos peajes de cabuya que sólo permiten el paso con aportes económicos.

Finalmente, hay que aclarar que muchas comunidades indígenas no tienen energía, mucho menos agua potable. En el mismo casco urbano del municipio de Uribia hay deficiencia energética y fluctúa, durante todas las jornadas, almuerzos y conversaciones que compartí con varias personas de las comunidades, se iba la luz. Al respecto, José Silva menciona que “Estamos situados frente a un departamento rico, pero sumido en la miseria en muchos aspectos, incluyendo el desconocimiento a nuestros derechos fundamentales. Con estos proyectos hay luz para el mundo y oscuridad para el pueblo wayuu”. Por su parte, el Subsecretario de minas y energía, Jorge Alberto Hurtado Cruz, mencionó que están en conversaciones con el Ministerio de Minas y Energía para el suministro de sistemas fotovoltaicos para garantizar la energía y la producción de agua, puesto que esa intermitencia ha afectado en gran medida el turismo del municipio, muchos turistas prefieren irse a otros municipios con flujo constante de energía.

Actualmente hay 16 parques eólicos activos o en construcción en el departamento, y hay cerca de 60 proyectos previstos para antes de 2030. En este estudio de caso vamos a revisar la conflictividad social que se ha generado alrededor de estos proyectos con las comunidades indígenas del territorio, principalmente los desacuerdos generados en el marco del proyecto de Windpeshi.

DEL CARBÓN AL VIENTO: CONTEXTO ENERGÉTICO DE LA GUAJIRA

En cuanto al contexto energético departamental, históricamente, la explotación de carbón a cielo abierto ha generado innumerables conflictos en el territorio y ha sido causante de problemas ambientales y socioculturales. Sin embargo, es importante cuestionarse qué pasará en el departamento sin carbón, puesto que ha traído claros beneficios económicos y se siguen subastando proyectos de energía térmica y recibiendo solicitudes de títulos mineros.

El potencial eólico de la Guajira se identificó y aprovechó desde que se construyó el primer parque eólico: Jepirachi. Actualmente, la transición energética tiene un foco en el departamento para acelerar los proyectos de energías limpias. Tanto así, que la ex ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmó que el departamento puede convertirse en “la capital mundial de energías verdes”, y según la UPME, tiene un potencial cercano a los 15.000 MW de energía (González, 2023). Adicionalmente, se destaca una medida propuesta en el nuevo PND que supone el aumento de la contribución financiera de las empresas de energías renovables deben hacer a las comunidades cercanas, pasando del 1% de las ventas brutas de energía, al 6%, lo cual ha representado una polémica en la industria energética.

Sin embargo, uno de los principales retos de la revolución del viento es superar la conflictividad social alrededor de los proyectos. Los obstáculos que impiden desarrollar la transición energética ponen en riesgo miles de millones de dólares invertidos en el territorio.

A pesar de contar con licencias ambientales y aprobación de diferentes instituciones, las condiciones socio-culturales del territorio han impedido el avance de proyectos de energía eólica. La UPME, por ejemplo, manifestó que a 31 de marzo de 2023 se presentan retrasos en la construcción de 10 de los 16 proyectos de energía eólica (Forbes, 2023). Un caso muy similar se ha presentado en el proyecto Guajira 1 de Isagen que en 2022 fue objeto de bloqueo por parte de comunidades wayuu que reclaman una supuesta ilegitimidad del proceso de consulta, así como impactos culturales derivados del proyecto. Por otro lado, es necesario identificar el mapa energético del país y reconocer que en la Guajira se están iniciando el 98% de los proyectos de energía eólica, que traen consigo diferentes problemas y desacuerdos con la comunidad wayuu.

Andrés Iguarán, coordinador de sostenibilidad del proyecto Windpeshi, afirma que si bien el cambio en el impacto ambiental es evidente con la energía eólica y la transición a cero emisiones, la prioridad de las comunidades wayuu se encuentra en la generación de empleo y las intervenciones en favor del territorio y sus comunidades, en lo que la minería lleva una ventaja considerable al demandar más empleo. Sin embargo, ante las expectativas de cierre de Cerrejón, los proyectos de energía eólica brindan una oportunidad de transición económica de las comunidades. Adicionalmente, Andrés resalta que con el carbón Colombia sólo hace parte del proceso de extracción: “somos la cola de un sistema, en cambio, con la energía eólica seríamos la cabeza de un sistema de generación de un servicio que permite una interconexión”.

Por su parte, cuando Jorge Hurtado se pregunta ¿qué pasaría sin carbón? Surge la reflexión sobre un recurso que no es renovable y la eólica presenta una alternativa para el progreso energético a nivel departamental y nacional: “somos la cabeza de Colombia y somos pioneros en la transformación energética del país”. Sin embargo, José Silva nos hace ver que en cuanto a las prácticas sociales falta mucho camino que recorrer, mencionando similitudes en la actuación de algunas empresas al desconocer los derechos fundamentales y el no reconocimiento a los pueblos wayuu.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA GUAJIRA

La necesidad de transformación productiva, institucional, social y ambiental se hace cada vez más evidente, por eso es necesario identificar los problemas y la acentuación de conflictos ya existentes que pueden generar los proyectos de energía eólica en el territorio. La transición energética en el departamento se está dando de manera vertiginosa, pues se presenta como una oportunidad de inversión de cara a los compromisos frente al cambio climático.

Martha Isabel Cobo, investigadora del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y decana de ingeniería de la Universidad de La Sabana en Bogotá, explica que actualmente la participación solar y eólica en la matriz energética colombiana es solo del 0,76% y el 0,10%, con 184 MW y 39,5 MW, respectivamente. La necesidad de avanzar hacia la transición energética es urgente y agrega que “en los próximos años, se espera un crecimiento en la capacidad instalada tanto de tecnologías solares como eólicas. Para 2027, se espera instalar 16.650 MW en solar y 5.795 MW en eólicas” (González, 2023).

Esta transición energética de Colombia gira alrededor de cinco ejes fundamentales: mayores inversiones en energías limpias y descarbonización; la sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles; una mayor eficiencia energética; la revisión y eventual flexibilización de la regulación para acelerar la generación de energías limpias y la reindustrialización de la economía colombiana (Minenergía, 2023).

Son 16 las empresas que lideran esta transición energética en el departamento, y hay especial atención para acelerar los proyectos de energías limpias. “la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmó que el departamento puede convertirse en “la capital mundial de energías verdes”, y según la UPME, tiene un potencial cercano a los 15.000 MW de

energía” (Gonzalez, 2023). Sin embargo, esta transición energética y los pilotos de parques eólicos se están desarrollando en territorios donde prima la pobreza, hay falta de agua y de electricidad, por lo que es indispensable brindar seguridad jurídica y la garantía de derechos para las comunidades wayuu. Por otro lado, la revista Forbes expone uno de los principales problemas de la transición energética en el departamento:

Proyectos como Alpha, de EDP Renovables, y JK2, de AES Colombia, presentan retrasos del 74,69% y 96,4% respectivamente. De igual forma, Beta, Camelias y Windpeshi, entre otras, tampoco han cumplido con sus cronogramas de construcción debido a la compleja situación que vive la región. Se esperaba que estos proyectos ingresaran al mercado entre 2023 y 2025, pero otro factor que contribuye a los retrasos es el Colector, la principal línea de transmisión en el área que conecta los proyectos con la región central del país. Las consultas previas con las comunidades locales también han obstaculizado el progreso en la línea de transmisión (Forbes, 2023).

Si bien es cierto que la cantidad de recursos invertidos en los proyectos de energías renovables están en riesgo debido al fracaso en los acuerdos con algunas comunidades wayuu, Colombia está en una carrera contrareloj para cumplir las metas de descarbonización a 2050 y abandonar la dependencia a la minería y los hidrocarburos. Una de las posiciones de algunas comunidades es que usan su territorio para generar energía que las mismas comunidades no tienen, José Silva menciona que “no se trata tampoco que nos traigan un foco para que alumbré, se trata de generar autosostenibilidad en las comunidades. No es que nos den luz, es qué hacemos con la luz. Tiene que haber un cambio de raíz”.

El futuro de la energía eólica se está construyendo de la mano de las comunidades wayuu en la Guajira, y el secretario de la Oficina de Asuntos Indígenas del municipio de Maicao, José Santos, brinda una perspectiva favorecedora: “Desde la dirección étnica de

Maicao hemos sido abiertos al diálogo y a la invitación respetuosa de las empresas para todo el proceso de relacionamiento social que tienen en el territorio”.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS: UN CONCEPTO AMPLIO

En el marco de la transición energética justa se propone la creación de las Comunidades Energéticas, una solución integrada que toma como pilar la generación a través de fuentes no convencionales de energía renovable articulados con proyectos productivos para el desarrollo local. El IPSE priorizó las dos primeras comunidades energéticas, una de ellas es en Uribia (Cabo de la Vela – Media Luna). Estos dos territorios, que hacen parte de las Zonas No Interconectadas (ZNI), se pueden potencializar a través de la energía. Javier Campillo, el director del IPSE, aseguró que

Cuando se llega con energía a una comunidad que nunca la ha tenido y que además cuenta con una vocación productiva se genera un impacto en el desarrollo. Queremos que la mejora en la productividad basada en la energía no sea un resultado casual sino una solución integrada y articulada por el Gobierno Nacional, las comunidades y el sector privado. De eso se trata a democratización de la energía a través de las Comunidades Energéticas en las zonas no interconectadas. (IPSE, 2023)

La implementación de las 2 instalaciones fotovoltaicas se dio en dos instituciones educativas: el Centro de Desarrollo Infantil de Media Luna y en el Internado Indígena Cabo de la Vela. Jorge Hurtado, el subsecretario de minas y energía de Uribia, fue testigo de estas instalaciones y comenta que el sistema fotovoltaico alimenta refrigeradores, una panadería y permite la llegada de agua potable. Adicionalmente, de la mano de la generación de energía, el IPSE (2023) informa que se adelantará un proyecto de fortalecimiento educativo piscícola para la producción de tilapia roja y garantizar el autoconsumo de la comunidad de Cabo de la Vela y la venta de los excedentes de la producción pesquera. En cuanto al centro de

desarrollo infantil de Media Luna se menciona el trabajo de un proceso de fortalecimiento lúdico educativo. En ambos proyectos, el IPSE busca realizar una articulación o alianza con las empresas del sector para la financiación del componente económico y social.

Es claro que para todos los actores, las Comunidades Energéticas no significan lo mismo. Para José Silva, de la ONG Nación Wayuu, “son un proyecto que nace con el objetivo de que las comunidades wayuu pudiesen ser dueñas y productoras de su propia energía, que percibieran las utilidades que dejan estos proyectos”. José menciona que las Comunidades Energéticas pueden empoderar al pueblo wayuu y ser socios en la producción de energía limpia.

Una de las principales apuestas de la transición energética en la Guajira son las alianzas étnico-privadas. José dice: “nosotros tenemos la tierra, ustedes los recursos ¡Inviertan!”. Es una propuesta a considerar para permitir el desarrollo y beneficio de ambas partes, sin embargo, como es bien sabido: del dicho al hecho hay mucho trecho. Mónica Uribe Mariño, jefe de división de sostenibilidad y economía circular de Enel Power Generation Colombia y Centroamérica, comenta que debería existir alguna figura jurídica para dar solución energética a las comunidades indígenas, y que ellos provean y comercialicen la energía, que sean los prestadores de ese servicio. No obstante, resalta el alto grado de dificultad a lo que esta idea conlleva. Se debe conformar una asociación, que las comunidades se pongan de acuerdo con el objetivo de la prestación del servicio, la destinación del dinero, los responsables directos, quién maneja los ingresos, la transparencia, las rendiciones de cuentas, entre otras cosas.

“¿Tú vas a sacar energía de aquí y no me vas a dar?” Vamos a ver si la propuesta de las Comunidades Energéticas logra dirimir la pregunta enunciada por un miembro de la comunidad wayuu.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LOS PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA.

En la Guajira se han presentado muchas disputas que giran entorno a tres temas: la ocupación del territorio por 16 proyectos eólicos actuales con la proyección de aumentar la cifra a 57; la afectación paisajística con los aerogeneradores y los impactos negativos a las comunidades, la cultura y cosmovisión wayuu. Se han denunciado múltiples casos de supuestas negociaciones inadecuadas con líderes wayuu en las zonas afectadas y ha habido problemas de concertación. José Silva, desde la ONG Nación Wayuu dice que

Antes de ingresar a cualquier territorio, se debe conocer su historia, quiénes son, dónde habitan y cómo viven. Llegan, los engañan con bolsitas de comida, pasan por encima de los derechos fundamentales y del consentimiento previo, libre e informado. Entran a generar conflictos internos en los territorios y dividir a las comunidades (Silva J, 2023).

Surge la duda y algunos denuncian los parques eólicos como una nueva modalidad de extractivismo que podría reproducir las afectaciones de la industria de combustibles fósiles, creando disputas por la tierra y afectaciones al paisaje, reemplazando árboles por aerogeneradores y haciendo migrar a las aves que según las comunidades los despiertan con su canto. Esto nos hace cuestionar si las energías renovables pueden favorecer la construcción conjunta del territorio, o si por el contrario, indirectamente pueden favorecer la fragmentación del mismo.

José Silva afirma que el mal relacionamiento genera discrepancias y las comunidades wayuu terminan matándose entre ellos mismos, la llegada de las empresas al territorio daña la sana convivencia y el entorno. En contraste con la posición de la ONG, José Santos, el secretario de la OAI de Maicao, menciona que siempre se ha puesto a las empresas como culpables de los desacuerdos internos de las comunidades, pero que eso no es una realidad

que se pueda generalizar y los problemas que se presentan se deben a intereses particulares y disputas territoriales. Por otro lado, desde la perspectiva de las empresas,

De los principales retos de la transición energética en la Guajira, Enel resalta la intervención en territorios indígenas, puesto que tiene complejidades que no se presentan en otras zonas del país. En la Guajira el viento está en potencia, que comparado con otras partes del mundo no se encuentra, es muy apetecible y esa es la razón de ser de todo el portafolio y las solicitudes de varios proyectos eólicos. Sin embargo, al ingresar al territorio nos encontramos con diferentes condiciones de vulnerabilidad, falta de agua, terreno desértico, entre otras condiciones que dificultan la operación, sumado a operar en un resguardo indígena, la ausencia estatal y los vacíos normativos existentes (Uribe, M. 2023).

La ausencia histórica del estado y la corrupción no es una noticia nueva, pero para cualquier empresa es complicado llegar a un territorio donde hay falencias en la actuación del Estado o la ausencia del mismo, donde hay Necesidades Básicas Insatisfechas en las zonas de influencia de los proyectos y no se permite suplantar la responsabilidad del Estado de solventarlas. Desarrollar un proyecto en estas condiciones es complejo, y así como asegura Mónica “es imposible prever tantas complejidades y que como consecuencia lleguen retrasos en la operación de tal magnitud, esto resulta en la suspensión indefinida del proyecto” (2023).

Es claro que cada comunidad tiene un nivel diferente de complejidad, pero hay un aspecto que quisiera resaltar: el liderazgo en los resguardos indígenas no es tan fácil de identificar. En los wayuu hay autoridades ancestrales, tradicionales y voceros. La concertación entre todos los actores se hace más difícil, y cuando se desbordan los problemas, la institucionalidad, como las Oficinas de Asuntos Indígenas (OAI); que intervienen cuando hay diferencias internas en las comunidades para ser garantes que el proceso de conciliación llegue a feliz término; no dan abasto para brindar soluciones efectivas y eficaces a tiempo,

no hay respuestas oportunas, mucho menos la capacidad de brindar acompañamiento a las empresas.

PARQUE EÓLICO WINDPESHI

El parque eólico Winspeshi es uno de los 16 proyectos de energía eólica que están en marcha en el departamento de la Guajira, está ubicado en jurisdicción de los municipios de Uribia y Maicao. De acuerdo con Enel Green Power (2023) el parque tendría una potencia de 205 megavatios (MW), gracias a los 41 aerogeneradores que serían instalados en un área de alrededor de 6.200 hectáreas. Además de la construcción del parque eólico, este proyecto contempla el desarrollo de una línea de alta tensión de 97 kilómetros y 220 kilovatios (kV), así como la adecuación de 32 kilómetros de la vía Uribia-Wimpeshi, que mejora la conectividad de la zona y viabiliza el acceso al parque.

Según los informes de la empresa, la capacidad instalada de Windpeshi (205MW) generaría 1.011 GW-hora/año, energía que es capaz de suplir las necesidades anuales de cerca de 500 mil hogares. Adicionalmente, en el marco de constitución del proyecto se han contratado 325 guajiros, 196 provenientes de los municipios de Uribia y Maicao y ejecutado diversos proyectos de valor compartido enfocados en la educación, salud y bienestar, acceso al agua potable y fortalecimiento de cadenas productivas (Enel Green Power, 2022).

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los US\$400 millones, y además de los recursos asociados a los compromisos de consulta previa, se han invertido más de \$7.100 millones COP en proyectos relacionados con educación, salud y bienestar, acceso al agua potable y emprendimientos locales. Actualmente, aunque el proyecto se encuentra suspendido de manera indefinida, el avance reportado es cercano al 35%.

Enel Green Power, es la empresa encargada de desarrollar el parque eólico Windpeshi y otros dos proyectos en el departamento, su línea de negocios de Enel Colombia, en 2018

inauguró el parque solar El Paso (86,2 MWdc) y actualmente está construyendo el proyecto fotovoltaico La Loma (187 MWdc) en el departamento del Cesar, junto con otros dos proyectos solares, la empresa trabaja en la transición energética con energías renovables no convencionales. Windpeshi es el proyecto eólico más avanzado de Enel en Colombia, y junto con Tumawind y Chemesky, los tres parques eólicos en el departamento de la Guajira, sumarían 508 MW de capacidad instalada y podrán generar 2.340 GWh al año durante 20 años (Enel, 2019).

Como Jefe de División de Sostenibilidad y economía circular de Enel Power Generation Colombia y Centroamérica, Mónica Uribe menciona que la transición energética es indispensable:

Por la línea global de Enel Green Power, estamos comprometidos con la descarbonización total para 2050 en todos los países, estamos desmantelando las térmicas y le apostamos a la transición energética global como empresa. En otros países la transición ya es una realidad, en Colombia se empezó a hablar de normativas y a avanzar en el alineamiento del Estado con esta transición, y Enel se comprometió como pionero en la transición energética colombiana.

EL CONFLICTO Y LA CONSECUENTE SUSPENSIÓN DE WINDPESHI

En mayo de 2023, tras realizar análisis y estudios de viabilidad del proyecto, la Junta Directiva de la empresa decidió la suspensión indefinida del proyecto por los retrasos en el cronograma de obra y las mayores inversiones que esto ha derivado. Debido a las constantes vías de hecho surgió la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto.

Las obras estuvieron detenidas durante cerca del 50% de las jornadas laborales durante 2021 y 2022, hasta mayo de 2023 la cifra ascendió a 60% (Enel Colombia, 2023). Se han considerado las opciones de venta del proyecto con la disposición de Enel de facilitar los

acuerdos necesarios para que las partes interesadas puedan continuar con la construcción de este proyecto. En esta fase de suspensión indefinida se mantienen únicamente labores constructivas necesarias de cara al cumplimiento de los compromisos sociales y ambientales.

Enel Green Power denunció que desde 2022 y en lo corrido de 2023, el parque eólico Windpeshi y la vía Uribia–Wimpeshi han tenido 33 bloqueos. Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power en Colombia y Centroamérica, manifestó que “los proyectos tienen que ser sostenibles no sólo desde el punto de vista social sino también económico y su éxito depende del trabajo conjunto entre empresas, instituciones y comunidades. Continuaremos dialogando con las comunidades y grupos de interés para abordar las implicaciones de esta decisión” (Enel Colombia, 2023).

De acuerdo con Cambio Colombia (2023), por un lado, las comunidades indígenas dicen que las licencias otorgadas y los procesos de consulta previa no tienen en cuenta realmente a sus autoridades y pudieron desconocer la cadena de mando y quiénes son los realmente autorizados para dar permisos de construcción en sus territorios y de pasar los carros por sus carreteras. Por el otro lado, las empresas están inconformes ante la falta de acompañamiento del Estado en la negociación con las comunidades.

En la misma línea anterior, uno de los problemas más resonados en el departamento es la seguridad en las carreteras y los ya nombrados anteriormente peajes de cabuya, que pueden cobrar hasta \$50.000 COP por trayecto. Es preocupante ver cómo algunos conductores prefieren estar armados antes que dejarse robar el vehículo y a quienes nos transportamos en ellos. “Todos piden lo mismo: que el Estado por fin asuma sus responsabilidades en La Guajira, respetando la organización indígena pero sin dejar a los empresarios a su suerte en el territorio” (Cambio Colombia, 2023). José Santos, secretario de la OAI de Maicao, afirma que uno de los principales errores en los procesos de consulta previa, por ejemplo, es no garantizar la participación de todas las entidades estatales

relacionadas, la presencia en la mayoría del proceso consultivo es únicamente comunidades-empresa:

Se debería garantizar la participación de las alcaldías, de corpoguajira, la defensoría del pueblo, la ANLA, las personerías y demás instituciones relacionadas, es hasta después que se empiezan a pronunciar. La OAI es citada, pero nosotros tenemos limitaciones en recursos y capacidad para desplazarse a los territorios, no podemos sacar de recursos propios para desplazarnos a todas las rancherías (Santos, J. 2023)

Si bien es evidente la ausencia del Estado, también es necesario resaltar la falta de capacidad institucional y la intervención tardía: todas las negociaciones se llevaron a cabo sin un liderazgo ni acompañamiento por parte del Estado, y Enel considera necesario crear y garantizar unas condiciones uniformes y estables, no por gobierno de turno. Es la única manera en la que una transición energética justa pueda darse y mantenerse en el tiempo.

En cuanto al proceso de consultas previas, Andrés Iguarán, coordinador de sostenibilidad del proyecto Windpeshi, afirma que desde Enel siempre hablaron con las autoridades correspondientes y reconocidas legalmente. Así mismo, Hermam Henríquez de Armas, Secretario de la Oficina de Asuntos Indígenas de Uribia, afirma que el proceso de consulta previa se hizo de manera correcta, sin embargo “intereses particulares de ciertos sectores de una de las comunidades desencadenó una serie de desacuerdos y terminó de esta manera” (2023).

En el contexto particular de las 13 comunidades wayuu involucradas en la zona de influencia de Windpeshi sucedió lo siguiente: Muchas familias wayuu en los años setenta y ochenta se trasladaron a Venezuela u otros lugares, y para 2017, a causa del aumento de intervención en el territorio y la llegada de varios proyectos eólicos, muchos retornaron al territorio y se generaron disputas internas de la comunidad por la tierra y los derechos

adquiridos al habitarla. Al respecto, Josefina, líder, miembro y autoridad de la comunidad wayuu Kamushipa, mencionó que “en esa época no existía la cantidad de personas que hay ahora en el territorio, muchos habían migrado a Venezuela, y por la crisis del país vecino ellos retornaron a su tierra, para entonces la empresa ya estaba acá”. De acuerdo con Hermam, las tierras empezaron a cobrar mayor relevancia debido al potencial eólico. Llegaron varias personas alegando que eran dueños del territorio, y unos sí estaban reconocidos como autoridades ancestrales, otros no. Con el apoyo de la OAI de Uribia se identificaron los dueños del territorio legítimos, pero eso no evitó que se generaran disputas internas y desacuerdos en las comunidades.

Ahora bien, estas disputas internas sí generan retrasos en los procesos, porque se pide constantemente la revisión de las consultas previas y los acuerdos anteriormente establecidos con las autoridades competentes y legalmente reconocidas. De igual forma, empezó una competencia por servicios, puesto que la cantidad de retornados aumentó vertiginosamente y lo acordado se volvió insuficiente, se hicieron renegociaciones exitosas, hasta el involucramiento de asesores externos, con los cuales nunca se llegó a un acuerdo razonable y terminó en la suspensión indefinida del proyecto.

Es importante entender que el proceso en la toma de decisiones de las comunidades wayuu puede variar. Euniris, de la comunidad Wayuu de Flor de la Frontera, decía que las decisiones se toman a través de reuniones con la autoridad ancestral, tradicional y un líder o lideresa que se encarga de hacer llegar la información y la gestión de las consultas que lleguen a la comunidad. En la reunión participan las autoridades, los jóvenes, los habitantes, se explican los temas a tratar y se toman decisiones en conjunto a través del diálogo.

Euniris nombró la llegada de la empresa al territorio wayuu como algo positivo: “Llegaron como en 2016 y visitaron ranchería por ranchería, se hicieron conocer por las autoridades y por la gente. Nosotros hicimos muchas preguntas y empezamos a conocernos entre sí”. Josefina, líder, miembro y autoridad de la comunidad wayuu Kamushipa, coincidió con Euniris y dijo que “la llegada de la empresa no fue arbitraria, hicieron una sensibilización,

identificaron a las autoridades competentes a través de un diagnóstico, querían conocer las comunidades, el territorio y sus formas de vida”.

Cuando nombraron el proceso de la consulta, Euniris mencionó que todo se dio de manera transparente y se sugirió el contacto y el relacionamiento directo entre empresas y comunidades, sin intermediarios. Tanto en la preconsulta como en la consulta había habido aprobación por parte de todas las comunidades, pero se acordó la búsqueda de un asesor para entender sobre la energía eólica y las implicaciones para sus territorios, con un detalle importante: los asesores podían dar consejos e información, pero no se iban a apoderar, la toma de decisiones debía seguir siendo de la comunidad:

Hay ONG o asesores que están por su propio beneficio. Te dicen: “esto cuesta tanto, te tienen que dar tanto, apoderame a mí, yo te entrego y lo tuyo y cojo lo mio”. Los asesores que son apoderados no velan por los intereses de la comunidad, nosotros somos autónomos. Podemos tener asesores, pero sin apoderarlos para la toma de decisiones. Pueden contarnos en qué consisten los proyectos, qué generan, los impactos positivos, negativos, pero no que tomen decisiones sobre lo que no saben teniendo en cuenta las condiciones de la comunidad. Nosotros buscamos que se levante un puesto de salud, que se mejore un colegio, así se genera empleo, pero los asesores dicen que es plata de la tierra y que con eso se pueden comprar un carro, una moto: “apoderame y vemos cómo sacamos plata”. (Euniris, 2023)

Cuando se abrió el espacio de asesorías externas de terceros durante el proceso de consulta, José Santos, secretario de la OAI de Maicao, menciona que se desbarataron una gran cantidad de acuerdos prestablecidos y se intentaron imponer exigencias innegociables. De acuerdo con José Silva, de la ONG Nación Wayuu, la función de ellos como asesores externos es el acompañamiento jurídico, la defensa de los derechos del pueblo wayuu y el seguimiento de acuerdos, pero después de una mesa de negociación en marzo de 2023, identificaron irregularidades en el proceso, al respecto, José Silva dice que “las mesas de

negociación son exitosas cuando hay un asesoramiento a las comunidades wayuu, somos mediadores para que haya un equilibrio entre las comunidades y las empresas”.

Para este punto ya había muchos malentendidos y desacuerdos, Euniris decía que los asesores “envenenaron la cabeza de muchas personas”, pero que ella y muchos otros se mantuvieron en la palabra de permitir y aceptar el proyecto y la operación de la empresa en el territorio. “Nosotros los wayuu somos muy complejos, en nuestros usos y costumbres somos muy complejos, pero reconocemos el valor de la palabra”, dijo. Cerró diciendo: “Nosotros sí queremos que venga el proyecto nuevamente, volver a poder trabajar, no trasladarse a otras ciudades, nosotros éramos reyes, teníamos trabajo en la comunidad, agua potable y hacían inversión en los niños”.

Dinora, de la comunidad wayuu Yosulú, cuenta que la toma de decisiones la tienen las autoridades ancestrales, pero se dialoga con la comunidad. En el caso de su comunidad, que no hace parte de la zona de influencia de Windpeshi, no hubo intermediarios y tampoco se hablaba de entregas de dinero como compensaciones por las intervenciones de los parques eólicos en su territorio, sino de entregas de proyectos, la construcción de cementerios, de colegios, de pozos, de viviendas y de paneles solares: “nosotros nunca tuvimos asesores y así es mejor. El asesor se come la plata de la comunidad. Aunque uno no sea profesional, puede aprender, o preguntar en otra parte, pero no pueden surgir malentendidos por mala información”.

El involucramiento de terceros asesores es una discusión bastante amplia: De acuerdo con José Santos, las pretensiones de los asesores fueron demasiado exageradas, no se llegó a un acuerdo y la relación se dañó. Así mismo, reconoce la transparencia del proceso de consulta previa con las 13 comunidades wayuu en la zona de influencia del proyecto. Sin embargo, también menciona que

La consulta previa debe ser veraz, libre e informada, debe ser un proceso horizontal donde haya igualdad de condiciones entre la comunidad y la empresa. Llegan los profesionales técnicos y sociales a negociar con una comunidad que no tiene conocimientos, muchos ni quiera hablan español. El proceso informativo no es fácil, y en el momento de involucrar asesores externos se corre el riesgo que ellos velen por sus propios intereses y dejen de lado la función de conciliadores, los terceros pueden ser beneficiosos o dañinos, el discurso es para favorecer a los pueblos wayuu, pero terminan favoreciendo sus intereses sin tener en cuenta que la cantidad de recursos que movilizan estos proyectos están a disposición de mejorar la calidad de vida de muchas comunidades (Santos, J. 2023).

Otro aspecto relevante en este conflicto social lo resalta José Santos, y se refiere al desconocimiento por parte de las comunidades wayuu sobre lo que es un parque eólico y lo que significa para sus territorios, si bien los acuerdos se firmaron de manera debida con las autoridades de cada comunidad, hubo una falta de información que pudo ocasionar malentendidos. Es una responsabilidad por parte de la empresa mejorar los procesos informativos y de socialización con las comunidades. Así mismo, José Santos sugiere no buscar intermediarios, sino hablar directamente con las comunidades para evitar el entorpecimiento del proceso, porque puede llegar a tumbar acuerdos previamente hechos y en varias ocasiones no resulta ser en favor de las comunidades, sino de los mismos terceros.

Alexander, miembro de la comunidad wayuu de Romana, del sector de Julapa, dice que debería haber mayor acompañamiento de diferentes actores en el territorio para evitar la falta de información y conocimiento de las comunidades indígenas. “Las comunidades deben estar en capacidad de negociar, y los que dominan el español no son muchos. Se necesita buena educación e información sobre estos proyectos”.

Por su parte, Delia, sobrina de la autoridad de la comunidad wayuu de Romana comentó que al principio ellos estuvieron de acuerdo con el proyecto, querían un cambio,

querían desarrollarse, querían agua, pero cuando se empezó a desarrollar el proyecto y se dimensionó la ocupación del territorio, surgieron incomodidades entre varias partes. Aclara: “ellos sí explicaron qué tanto del territorio se iba a ocupar, pero de la teoría a la realidad hubo impacto. Había mucha necesidad en el territorio, sobre todo de agua, y hubo común acuerdo con esa intervención”.

LA INTENSIDAD DEL CONFLICTO Y SUS PERSPECTIVAS

Las vías de hecho fueron originadas, principalmente, por dinámicas sociales internas de las comunidades wayuu en la zona de influencia del proyecto. Aunque Enel no tuvo responsabilidad en esas disputas, se vio involucrada y afectada por las exigencias de los asesores externos de un sector de una de las comunidades wayuu, exigencias que fueron más allá del marco de actuación de la empresa y no se logró un acuerdo.

Una de las comunidades wayuu más renombrada en medios de comunicación por la conflictividad social en el marco de Windpeshi fue la comunidad de Romana. Julapa es un sector de la comunidad de Romana, pero no está constituida como una comunidad aparte ni tiene líderes ni autoridades reconocidos legalmente. Lo que para José Silva, el líder de la ONG Nación Wayuu, fue una fragmentación de una familia wayuu, para Delia, sobrina de la autoridad de la comunidad de Romana fue diferente: “los problemas y bloqueos no fueron por falta de información, siempre han estado informados. Se trataba de un sector que se denominó como independiente, pero pertenecían a la comunidad de Romana. Ellos querían que les hicieran una consulta previa a ellos, pero la empresa no podía hacerlo porque no tienen certificado como comunidad”.

Cuando le pregunté a Euniris si la empresa había propiciado de alguna manera los conflictos en las comunidades, me contestó que la empresa nunca generó conflictos en las familias: “los conflictos de nosotros son territoriales y claniles, eso ya existía anteriormente y nada tiene que ver con la empresa”. Delia coincide con Euniris, y mencionó que “no es un

problema de la empresa, es un desacuerdo interno de la comunidad. Pocos de ellos habitaban en el territorio, cuando retornaron de Venezuela, afirmaban que no se les había informado y que ellos eran una comunidad aparte”.

José Silva responsabiliza a Enel de la división de una familia wayuu por las malas negociaciones y la exclusión del sector de Julapa en el proceso de las consultas previas, afirma que hubo un mal manejo de las consultas previas y un mal relacionamiento de Enel con las comunidades: “Ellos no son quiénes para decidir quién debe ser consultado y quién no”, dijo. Afirma que se consultó un sector de Romana y otro se dejó por fuera, a raíz de ese desacuerdo, se creó el sector de Julapa dentro de la misma comunidad y se exigía una consulta para ese sector. Sin embargo, de acuerdo a la normatividad, no se podía reconocer un sector como una comunidad wayuu aparte ni tener autoridades diferentes a las ya establecidas para Romana. Finalmente, José menciona que “antes de la llegada de la empresa, no existían esas peleas, enfrentamientos ni desplazamientos entre el mismo pueblo wayuu”.

El sector de Julapa se manifestó en contra de los acuerdos a los que había llegado la autoridad de la comunidad a la que pertenecen, Romana, bajo el argumento de tener que revisar el proceso consultivo realizado en 2017, que de acuerdo con la empresa, se hizo de manera reglamentaria y cumplió las obligaciones estipuladas en el marco normativo. El sector de Julapa, bajo el asesoramiento de la ONG, impidió el traslado del personal, de la maquinaria y de materiales al parque, lo que a su vez, afectó la contratación de mano de obra de gran parte de las comunidades y el apoyo a los encadenamientos productivos del proyecto. Alexander, del sector de Julapa, dice que deberían hacer más participes a las comunidades en estos proyectos, no dimensionaban ni esperaban un proyecto tan ambicioso a nivel nacional, y como son los primeros pasos de la transición energética en Colombia, no se supo proceder: “Excluyeron a Julapa del proceso consultivo, tampoco hubo acompañamiento hacia las comunidades, ni gente que hable el wayuunaiki, que realmente conozca la comunidad, su idioma y se aseguren que toda la comunidad entienda”.

En este conflicto, Delia, y su hermana Desiré, aceptan una mala intervención por parte de la ONG, en lugar del diálogo se promovieron los bloqueos y las vías de hecho por supuestas vulneraciones a los derechos humanos. La autoridad de la comunidad wayuu Romana, se negó a que la ONG los representara porque ellos tomaban sus propias decisiones, sin embargo, no se le podía negar la representación al sector de Julapa, que inconforme con la toma de decisiones del territorio, retrasó la operación de la empresa a través de los bloqueos mencionados. Para marzo de 2023 se estableció una mesa de seguimiento de resolución de conflictos, y de manera interna, entre la autoridad de Romana y el sector de Julapa se había llegado a un acuerdo de repartición de las compensaciones de la empresa, siempre que la dejaran operar y regresar a trabajar. Sin embargo, “por querer obtener más, y por la cizaña sembrada por la ONG”, no se permitió operar más a la empresa y fue cuando se tomó la decisión de la suspensión indefinida del proyecto. Finalmente, Delia menciona que

La empresa perdió meses y meses de trabajo. Las comunidades pedían empleo, pero no dejaban trabajar. ¿Cómo trabajaban si estaba bloqueado? Fue una pérdida para la empresa, pero también para las comunidades. Teníamos todas las herramientas para progresar, pero sin acuerdo, es imposible el progreso.

Desiré cerró la conversación diciendo que “la salida de la empresa fue muy triste, a pesar de todo ya había una labor y se echó a perder. Las familias trabajaban, hacían sus compras, yo veía a mi comunidad contenta. Con la partida de la empresa muchos sueños se desvanecieron, incluyendo el mío, que quería ser profesional”.

LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO Y LAS COMUNIDADES: INVERSIÓN SOCIAL

Desde 2016, Enel Green Power, en línea con los requerimientos de las autoridades, adelantó los trabajos de consulta previa, libre e informada en los territorios de las comunidades wayuu en las cuales se ejecutaría el parque eólico Windpeshi y su

correspondiente línea de transmisión. Además, ejecutó acuerdos de valor compartido con las comunidades pertenecientes a la zona de influencia de la vía Uribia-Wimpeshi. (Enel, 2022).

De acuerdo con los boletines informativos de la empresa, desde junio de 2022 hasta febrero de 2023 Enel Green Power ha realizado diferentes iniciativas que aportan al desarrollo social, ambiental y económico de las comunidades en las zonas de influencia del parque eólico Windpeshi.

En el momento de realizar el proceso de consultas previas se debían definir y priorizar las líneas de inversión social y las formas de compensación. A pesar que desde las comunidades wayuu nunca surgió el tema de generación de energía, cuando se manifestó que la energía del parque eólico sería producida para el Sistema Interconectado Nacional, y eso no incluía las rancherías en la zona de influencia del parque, se acordó hacer proyectos de energía limpia a estas zonas de influencia, y con la entrada en operación del proyecto se iban a instalar diferentes puntos de electrificación con paneles solares. Las líneas de inversión se centraron en el agua potable, fortalecimiento cultural, salud y bienestar y proyectos productivos.

En cuanto la empleabilidad de mano de obra local, se habían contratado más de 860 personas durante las distintas fases constructivas del proyecto. Antes de la suspensión del parque, más de 340 guajiros están vinculados a Windpeshi (Enel, 2023). De acuerdo con Mónica Uribe, la mano de obra calificada y no calificada fue enorme, y la no calificada venía de las mismas comunidades wayuu de la zona de influencia del proyecto: “Ellos nunca habían tenido un empleo formal, por primera vez pertenecieron a un equipo, a una empresa, construyeron capital profesional”.

Euniris, de la comunidad wayuu de Flor de la Frontera decía: “La empresa nos generó empleo, nos mejoró la calidad de vida, ya conocíamos la empresa, el proyecto era un hecho, los jóvenes tenían empleo, no había necesidad de irse a Venezuela o a Bogotá, el trabajo estaba aquí, en la comunidad” (2023).

Otro aspecto importante fue la magnitud de contratación de bienes y servicios locales, diferentes personas mencionaron que, a malos cálculos, el 70% del consumo del municipio de Uribia era por parte de la empresa, esto generaba un impacto territorial grande porque muchas familias podían generar ingresos por hospedaje, alimentación, transporte, compra de insumos, rentas de casas y demás gastos asociados al personal de la empresa. Jorge Hurtado, el subsecretario de minas y energía de Uribia, mencionó que la productividad del municipio se vio terriblemente afectada con la salida de la empresa del territorio, se sintió el vacío, ya no hay empleo, hay menor consumo y menos posibilidades. Al respecto, Euniris mencionó que “todo cambió. Antes teníamos empleo en la comunidad, todos los días veíamos a nuestras familias, los hijos, pero siempre había el que estaba inconforme, el que quería beneficio propio en lugar de buscar el bienestar de su comunidad”.

Entre otras cosas, en 2020 Enel firmó un convenio de cooperación con Artesanías de Colombia para aportar a la recuperación y el fortalecimiento de la tejeduría wayuu. La alianza les permitió a más de 290 indígenas afianzar sus técnicas waireñas e incluso, 86 de ellos comercializaron cerca de 180 productos en Expoartesanías 2021, la feria más grande de artesanías colombianas y productos culturales.

Adicionalmente, en alianza con el SENA se capacitaron a 65 personas en construcción básica y emprendimientos sostenibles; y desarrollaron un manual de interculturalidad con la Universidad de la Guajira (Enel, 2022). Esta herramienta, afirma la empresa, les permitió entender las dinámicas y particularidades de las comunidades indígenas y garantizar el relacionamiento respetuosa y armoniosa en sus territorios.

En el marco del proyecto eólico Windpeshi, la Compañía también ha construido 14 jagüeyes con la Fundación ACDI/VOCA para Latinoamérica, el Ministerio de Vivienda y el Ejército Nacional de Colombia, los cuales benefician a más de 1.670 indígenas wayuu. Esta iniciativa se suma a los sistemas de pilas públicas de Wimpeshi y Amalipa, financiado a través del mecanismo de Obras por Impuestos y

en el marco del programa Guajira Azul del Gobierno Nacional. Con él, actualmente 5.000 personas cuentan con acceso a agua potable (Enel, 2022).

En lo que respecta a la construcción del microacueducto, que actualmente sigue en funcionamiento, Enel menciona que fue diseñado específicamente para las comunidades en la zona de influencia del proyecto, cada comunidad cuenta con una enramada donde llega el carrotanque, cada comunidad tiene su depósito de agua, y esto no pasa en otras comunidades. Una iniciativa innovadora se puede resaltar como una alternativa funcional para el correcto relacionamiento entre las comunidades wayuu y las empresas: desde Enel Green Power se propuso la creación de comités técnicos y subcomités de diálogo social. Estos últimos, según explica Andrés Iguarán, coordinador de sostenibilidad del proyecto Windpeshi, constan de tres empleados de cada comunidad wayuu en la zona de influencia del proyecto, que son 13. Cada cual tiene roles constructivos de dinámica y cohesión social:

Esa dinámica les permitía reconocer la empresa, dar a conocer la información a sus comunidades y les permitía a ellos mismos delimitar su territorio, todas las comunidades abarcan alrededor de 5.000 Ha, y hoy tienen delimitado su territorio, no con límites visibles, sino con límites históricos que la comunidad ha establecido. Se hizo un proceso de cartografía social, se identificaron sitios representativos, y nos permitió entender a nosotros cómo llegaron, qué es importante o relevante para ellos y darle una solución a la dinámica social que se estaba presentando en el territorio (Iguarán, A. 2023).

En la misma línea, Mónica Uribe menciona que los subcomités de diálogo social eran una forma de aproximarse a la comunidad y generar empleo a la vez. Eran 39 personas que recibían capacitaciones y formación en temas de seguridad, construcción, consulta previa, liderazgo, entre otros. Ellos mismos se empoderaron del proyecto, se hizo un censo y se realizaron unas fichas de caracterización de cada comunidad para darse a conocer y a su territorio. Era una forma de resolución de conflictos potenciales, dudas y aclaraciones; esos

mismos integrantes de los subcomités les comunicaban a sus comunidades, en su idioma, todo lo relacionado al proyecto.

Finalmente era una construcción conjunta de territorio, la comunicación de los subcomités con sus comunidades permitía el entendimiento entre las partes, y fue uno de los mayores logros en el territorio, incluyendo la construcción de confianza. Nuestra voz logró entrar a las comunidades, en sus términos y en su idioma (Uribe, M. 2023).

Euniris mencionó que “la empresa se fue y dejó buenos proyectos: mejores animales, mejor techo, el microacueducto, pilas públicas en cada comunidad, jagueyes, el mejoramiento de la vía Uribia-Matajuna, mira, anteriormente llegábamos a Uribia sin riñones, muchos huecos”. Y ella misma me explicó el funcionamiento de los subcomités de diálogo:

“En cada comunidad se le da participación a un palabrero, que vela porque las cosas siempre se dialoguen; un veedor comunitario, que apoya a la empresa y verifica condiciones de seguridad, la asistencia y el cumplimiento de los acuerdos; y un auxiliar social, que hacía censos de la comunidad y ayudaba a hacer una base de datos para los empleos y demás. También se hacía una ficha de caracterización, que le permitía a la empresa conocernos. Nosotros sensibilizábamos a nuestras propias familias sobre el proyecto, porque por más que se les explique en wayuunaiki o en español hay necesidad de ciertas personas de la comunidad, y el subcomité procura cumplir lo protocolizado en la consulta previa, y es que la empresa estuvo sola, no hubo acompañamiento y nadie garantizaba que las comunidades cumplieran lo pactado, se tenía que trabajar conjuntamente, pero no hubo garantías para que el proyecto avanzara al 100% (Euniris, 2023)

Delia, sobrina de la autoridad de la comunidad wayuu de Romana, y quien además fue la auxiliadora social del subcomité de diálogo social de su comunidad, mencionó que los

subcomités facilitaban el diálogo, que cumplían la función de intermediarios ante las comunidades, solventaban dudas y además recibían capacitaciones, como de comunicación y diálogo social. Debían ser transparentes como intermediarios y personas de solución e información.

Finalmente, en cuanto a aspectos ambientales, Enel Green Power cuenta con dos licencias ambientales expedidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA): una para el parque eólico (Resolución 261 del 2020) y otra para la línea de transición (Resolución 1621 del 2021). En la misma línea, cuentan con dos Planes de Manejo Ambiental (PMA) que enmarcan su trabajo en el entorno en el que lo desarrollan. Con el proyecto se evita la emisión anual de aproximadamente un millón de toneladas de CO₂, lo cual contribuye en gran medida a las metas de descarbonización para 2050 establecidas en el Acuerdo de París y en la Política Nacional de Cambio Climático.

RETOS Y OPORTUNIDADES

Tras evidenciar los impactos reales y potenciales, positivos y negativos, y las acciones correctivas tomadas en el marco de la transición energética en la Guajira, particularmente del parque eólico Windpeshi, puedo asegurar que una forma de transformar el territorio se da a través de la reconstrucción de relaciones.

Desde los gobiernos locales se encontró un eco y una visión compartir de transformación de los territorios, pero no hay capacidad institucional. “Tenían más ganas, que manos”, decía Mónica Uribe. A pesar que el relacionamiento fue muy positivo entre la empresa y los gobiernos locales, había una dependencia económica de las comunidades hacia la empresa. Jorge Hurtado, subsecretario de minas y energía de Uribe coincide en que el sector público debe ser garante de que tanto las empresas, como las comunidades, cumplan los compromisos adquiridos y haya feliz término en lo acordado.

Una de las propuestas que está sobre la mesa son las asociaciones étnico-privadas y la creación de asociaciones indígenas autónomas que administren los recursos de las utilidades de los proyectos que se generan en su territorio, el reto está en el cómo. Es claro que el proceso de consultas previas se debe respetar y dar estricto cumplimiento para que no se conviertan en una trampa mortal para ambas partes, pero también hay alternativas complementarias, como el empoderamiento de las comunidades energéticas, que no sólo se tratan de suministrar energía, sino que van más allá.

Es necesario que exista seguridad jurídica para ambas partes en el desarrollo de estos proyectos, poder mantener los acuerdos es la única forma en la que se puede dar una transición energética justa. Delia, sobrina de la autoridad de la comunidad wayuu Romana, me dijo

Mi sugerencia es para nosotros mismos: tenemos que ser más conscientes de lo que nos están brindando: una oportunidad en nuestro territorio para desarrollarnos, y nosotros mismos lo echamos a perder. Para las empresas, les puedo decir que si se animan a entrar a nuestro territorio, sean transparentes. Así como somos transparentes con ellos, que ellos lo sean con nosotros. Y para cerrar: que haya participación, muchos son analfabetos y otros no saben español, el paisano que llega a confundir, si no va a ayudar, que no nos perjudique (Delia,2023).

REFERENCIAS

Enel Green Power, 2023. Parque eólico Windpeshi. Disponible en <https://www.enel.com.co/es/energias-no-renovables-egp/proyecto-eolico-windpeshi-enel.html>

Enel Green Power, 2022. Así funcionará el parque eólico Windpeshi en el departamento de la Guajira. Disponible en <https://www.enel.com.co/es/prensa/news/d202205-parque-windpeshi-guajira.html>

Enel Colombia, 2023. Enel Colombia suspende indefinidamente la construcción del Parque Eólico Windpeshi en La Guajira. Disponible en <https://www.enel.com.co/es/prensa/news/d202305-suspension-indefinida-windpeshi.html>

Enel Colombia, 2022. Con Windpeshi, Enel le apuesta al desarrollo de La Guajira. Disponible en <https://www.enel.com.co/es/historias/a202209-desarrollo-de-la-guajira-con-windpeshi.html>

Enel, 2021. Viento y agua, la combinación que mejora las condiciones de salubridad de más de 3.000 indígenas Wayuu en Colombia. Disponible en <https://www.enelgreenpower.com/es/paises/sudamerica/colombia/viento-agua-mejora-salubridad-indigenas-wayuu>

Enel, 2019. El futuro de Colombia va de la mano de las energías renovables de EGP. Disponible en <https://www.enelgreenpower.com/es/medios/news/2019/03/energias-renovables-en-colombia-5-nuevos-proyectos>

Cambio Colombia, 2023. Windpeshi: el efecto económico en La Guajira y en el sistema eléctrico. Disponible en <https://cambiocolombia.com/economia/windpeshi-el-efecto-economico-en-la-guajira-y-en-el-sistema-electrico>

Forbes, 2023. Enel suspende indefinidamente proyecto de energía eólica de US\$400 millones en La Guajira. Disponible en <https://forbes.co/2023/05/24/negocios/enel-suspende-indefinidamente-millonario-proyecto-de-energia-eolica-en-la-guajira>

Guía del gas, 2023. Bloqueos retrasan el proyecto eólico Windpeshi en La Guajira. Disponible en <https://guiadelgas.com/bloqueos-retrasan-el-proyecto-eolico-windpeshi-en-la-guajira/>

González, David (2023). Tomado de Diálogo Chino, mayo 31 de 2023. Los parques eólicos dividen a comunidades indígenas de Colombia. Disponible en <https://dialogochino.net/es/clima-y-energia-es/368855-los-parques-eolicos-dividen-a-comunidades-indigenas-de-colombia-wayuu/>

Minenergía, 2023. La transición energética justa en Colombia seguirá avanzando de manera gradual. Disponible en <https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/la-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-justa-en-colombia-seguir%C3%A1-avanzando-de-manera-gradual/>

IPSE, 2023. El IPSE priorizó las dos primeras Comunidades Energéticas de las zonas no interconectadas de Colombia en 2023. Disponible en <https://ipse.gov.co/blog/2023/03/16/el-ipse-priorizo-las-dos-primeras-comunidades-energeticas-de-las-zonas-no-interconectadas-de-colombia-en-2023/>

Entrevistas:

José Silva, director de la Organización Nación Wayuu.

Jorge Alberto Hurtado Cruz, Subsecretario de minas y energía de la alcaldía de Uribia.

Hermán Henríquez de Armas, Secretario de Oficina de Asuntos Indígenas de Uribia.

Mónica Uribe Mariño, Jefe de División de Sostenibilidad y economía circular de Enel Power Generation Colombia y Centroamérica

Andrés Iguarán, coordinador de sostenibilidad del proyecto windpeshi, Enel

José Santos, Secretario de la Oficina de Asuntos Indígenas de Maicao.

Alexander, miembro de la comunidad wayuu Romana, sector Julapa

Euniris, miembro de la comunidad wayuu Flor de la Frontera

Dinora, miembro de la comunidad wayuu Yosulú

Josefina, líder, autoridad y miembro de la comunidad wayuu Kamushipa

Delia, miembro de la comunidad wayuu Romana

Desiré, miembro de la comunidad wayuu Romana